

Informe a los
 miembros de la
 Comisión de la Verdad
 sobre los hechos
 ocurridos en el P.D.C.
 J. J. J.

Santiago, Julio 27 de 1987.

Señor
 Gabriel Valdés Subercaseaux
 Presidente del Partido
 Demócrata Cristiano
Presente

Estimado señor Presidente:

Le escribimos en representación de los partidos de la izquierda chilena, agrupados en la Izquierda Unida, para hacerle llegar algunas reflexiones y propuestas, en vistas de las importantes definiciones que habrá de adoptar la Democracia Cristiana.

Al hacerlo tenemos conciencia de nuestras diferencias. Si viviéramos en una democracia, ellas podrían ser dirimidas mediante el ejercicio de la soberanía popular que permitiría al pueblo chileno decidir acerca de quién interpreta mejor, en este momento, sus intereses y sentimientos. Pero al ser víctimas comunes de una dictadura y no existir este mecanismo corremos el riesgo de que la incomunicación y los discursos paralelos acaben privándonos de eficacia a todos, sin que sea demasiado importante saber quién tenía razón. Por ello, quienes hemos escogido la actividad política, como un camino para servir a nuestro pueblo y que por lo mismo, sabemos que el patriotismo no es un monopolio de nadie, no podemos renunciar a la búsqueda del diálogo que nos permita anteponer los intereses superiores de Chile a las ventajas que pudiéramos conseguir por separado.

Nos reafirma también en este empeño una valiosa experiencia de acciones comunes que, en distintos momentos de nuestra historia, contribuyeron al perfeccionamiento del sistema político y a la ampliación de la democracia chilena. Así, la Falange Nacional, junto a los partidos de izquierda rechazó la Ley de Defensa de la Democracia en 1947. Diez años más tarde levantamos juntos el Bloque de Saneamiento Democrático y contribuimos al perfeccionamiento del sistema electoral, el término del cohecho y el establecimiento de la cédula única. Juntos también establecimos el derecho a voto para los jóvenes mayores de 18 años y para los analfabetos, y aprobamos la Ley de Reforma Agraria y la Reforma Constitucional para la nacionalización del cobre.

Hoy día, nos inquieta profundamente que al no actuar unidos, o al menos concertados, contribuyamos a la perpetuación del régimen de Pinochet. Las fuerzas de oposición constituimos una clara mayoría democrática que ha colocado, por momentos, en franca situación de crisis al régimen autoritario,

pero que al no tener acuerdos sustanciales sobre la estrategia de lucha y las propuestas para organizar la transición, no hemos sido capaces hasta ahora de recuperar la democracia.

El régimen de Pinochet, por su parte, a pesar de su condición minoritaria ha sabido combinar el uso brutal y masivo de la represión con campañas destinadas a desacreditar a los partidos políticos y a acentuar sus diferencias, buscando dividirlos y neutralizarlos. En la aplicación de su estrategia ha exigido acatamiento a una Constitución como la de 1980, que en su lógica y en la totalidad de sus disposiciones, es incompatible con la democracia. Igualmente, ha buscado afianzar su voluntad de proscribir ideas, al mismo tiempo que vincula la oferta de legalidad a las restantes organizaciones políticas a la condición de que se expresen abiertamente por posturas anti marxistas. Sin entrar en calificaciones ni hacer el balance de los errores que unos u otros hayamos podido cometer, lo cierto es que, hasta ahora, no hemos tenido la fuerza suficiente para impedir que la dictadura avance en sus objetivos de perpetuación. Así, este año ha dictado las leyes políticas complementarias de su Constitución y se prepara a imponer mediante un fraude plebiscitario, la continuidad y consolidación del régimen dictatorial.

Impedir este hecho constituye hoy la mayor responsabilidad de todas las fuerzas democráticas y en particular de la Democracia Cristiana y de la Izquierda Unida, en la medida que ellas son, sin lugar a dudas, las dos mayores organizaciones de la oposición chilena y que cuentan con una enorme representación en las direcciones de las múltiples y variadas organizaciones sociales que agrupan y expresan a nuestro pueblo.

Invocando precisamente esta responsabilidad que no podremos eludir ni ahora ni frente a la historia quisieramos plantear a través suyo, al Partido Demócrata Cristiano algunos criterios de acción común y un conjunto de propuestas para impulsar la lucha democrática.

1) Creemos compartir con ustedes la convicción de que una salida democrática en Chile sólo es posible si se pone término a la institucionalidad establecida por el régimen actual en todos los amplios capítulos que consagran exclusiones o procedimientos anti democráticos. En otras palabras, necesitamos poner término a la Constitución de 1980 y establecer, por medios idóneos, las bases de un ordenamiento jurídico democrático.

2) Concordamos también en la apreciación de que el régimen actual, y especialmente Pinochet, no van a renunciar a sus designios. Por ello sólo la acción resuelta de las organizaciones políticas y sociales y su capacidad para acumular la fuerza necesaria, que permita cambiar la situación actual, podrá dar inicio a una efectiva transición democrática.

Todos los partidos políticos que formamos la Izquierda Unida hemos señalado en varias ocasiones, y quisieramos reiterarlo ahora, que buscamos una salida para Chile a partir de una derrota política del régimen actual. Con esta expresión queremos indicar, por una parte, el rol protagónico que el pueblo chileno organizado y movilizado debe desempeñar en dicho proceso y, por otra, que buscamos un desenlace suficientemente

claro como para que las autoridades democráticas que se establezcan puedan ejercer efectivamente el poder que se les dé sin que enfrentemos el riesgo de una involución autoritaria a corto plazo o tener que reconocer a los militares un derecho de veto sobre las decisiones de un gobierno débil. Esto, a su vez, sólo será posible si se reestructura profundamente a las Fuerzas Armadas haciéndolas retornar a sus tareas profesionales y subordinándolas al poder democráticamente generado, si se realizan las profundas modificaciones que necesita la administración de justicia para asegurar la plena vigencia de los Derechos Humanos y si se reorganiza la administración civil del Estado para vincularla, otra vez, con los objetivos y métodos democráticos. Con el mismo propósito será indispensable elaborar e impulsar un programa de cambios económicos y sociales que pongan en el centro los intereses de la mayoría de nuestro pueblo en torno al trabajo y las necesidades básicas, la realización de los principios de justicia social y el restablecimiento del control nacional sobre nuestras riquezas y recursos fundamentales.

De este modo, la lucha organizada de masas y la ruptura democrática son los dos elementos que distinguen a la simple liquidación del poder personal de Pinochet o a un mero recambio, de una salida política efectiva que nos conduzca a una democracia plena.

3) En este contexto expresamos nuestra adhesión al objetivo de rechazar e impedir el fraude plebiscitario y de imponer elecciones libres y democráticas que, en nuestro caso, vinculamos a la no exclusión y a todas las luchas de alcance más inmediato que hoy llevan adelante las organizaciones sociales de nuestro país, tal como lo hemos señalado al establecer el Comando de Lucha por las Demandas Populares y las Elecciones Libres y Democráticas de los partidos de la Izquierda Chilena. Dentro de este esfuerzo, que no haría más que reafirmar la práctica de los militantes de nuestros partidos de actuar juntos en las luchas sociales, expresamos nuestra clara voluntad de alcanzar acuerdos y concertaciones efectivas con el Partido Demócrata Cristiano y con otras fuerzas democráticas que compartan estas metas, para impulsar en conjunto todos los puntos de concordancia sustantivas.

4) Tenemos la certeza, también, de que es posible alcanzar una concordancia en las propuestas que hemos hecho para el manejo del período de transición post autoritario. En los documentos de la Democracia Cristiana y los elaborados por nuestros partidos hay coincidencia acerca del contenido y tareas de un gobierno provisional y algunas bases esenciales de la nueva organización política y económica. Los diversos partidos de izquierda, por otra parte, manifestamos, en su oportunidad que apoyábamos las Medidas Inmediatas contenidas en el Acuerdo Nacional.

Esta materia puede ser objeto de debates fructíferos y acuerdos importantes que afiancen la convivencia futura en Chile.

5) Apreciamos, del mismo modo, que existe un nítido consenso en torno a la gravedad que revistiría para el país la realización de un plebiscito, de clara esencia antidemocrática, puesto que sustituye por un acto de decisión administrativa el derecho natural de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes entre alternativas múltiples y que será organizado por un Gabinete que

tiene como Jefe político al mismo Ministro del Interior que manejó las fraudulentas consultas de 1978 y 1980, en donde no se dió ninguna garantía a los disidentes y ni siquiera se levantaron los estados de excepción, restrictivos de las libertades públicas.

Presentar un frente común ante esta amenaza constituye una actitud elemental que, de nuestra parte, cuenta desde ahora con una clara voluntad política.

6) En relación a todo lo expuesto nos parece necesario señalar que las medidas más recientes del gobierno, así como algunas de sus amenazas, hacen más urgente una concertación concreta en torno a objetivos democráticos básicos. En particular nos referimos a la intención del régimen de llevar, hasta sus últimas consecuencias, la aplicación del Art. 8° de la Constitución de 1980, tal como queda de manifiesto en los requerimientos presentados en contra del ex Vicepresidente de la República, Clodomiro Almeyda, de la ex Senadora Julieta Campusano y de la ex Diputada y Ministra, Mi^{ra}reya Baltra, así como en los anuncios de nuevos procesos en contra de los solicitantes de un Comunicado de Prensa del Partido Comunista y de los directores de los diarios y revistas que lo publicaron.

Enfrentar resueltamente la vigencia del Art. 8° y afirmar el principio de que en Chile no es legítimo proscribir las ideas políticas de ningún signo, es una obligación de todos los sectores democráticos del país, puesto que no habrá paz social ni convivencia imaginable en un contexto semejante. En este campo son posibles acciones comunes que, también, nos interesa explorar seriamente.

7) Finalmente, pensamos que existen crecientes condiciones para un acuerdo en torno al rechazo de la inscripción de partidos políticos, mientras se mantenga el contexto que hemos descrito en los párrafos precedentes. Cuando además de insistir en las exclusiones e injurias diarias a los partidos políticos, se persigue por las autoridades administrativas a quienes han patrocinado la solicitud de inscripción de partidos que, ni siquiera se definen como opositores, se interviene las sedes sociales de estas mismas entidades o se exigen declaraciones juradas a los dirigentes sociales de que no pertenecen a partidos políticos, parece obvio que no existen las más mínimas garantías para el funcionamiento cabal de partidos políticos democráticos.

Señor Presidente de la Democracia Cristiana:

La próxima Reunión Nacional de la Democracia Cristiana deberá adoptar definiciones de carácter histórico, puesto que incidirán inevitablemente en los esfuerzos de recuperación de la democracia en que la inmensa mayoría de los chilenos estamos empeñados. Por ello, hemos querido presentar formalmente estas propuestas concretas para abrir un diálogo que nos conduzca a la concertación política de las más amplias fuerzas democráticas del país. Naturalmente, estamos dispuestos a ajustar nuestra conducta en relación al contenido de los acuerdos que alcancemos.

Con estas propuestas no quisiéramos esquivar los muchos puntos de legítimos disenso que pueden existir entre el Partido Demócrata Cristiano y los partidos agrupados en la Izquierda Unida. Pero nos interesa responder al clamor de unidad y eficacia que hacen tantos compatriotas nuestros que han comprendido que si las organiza

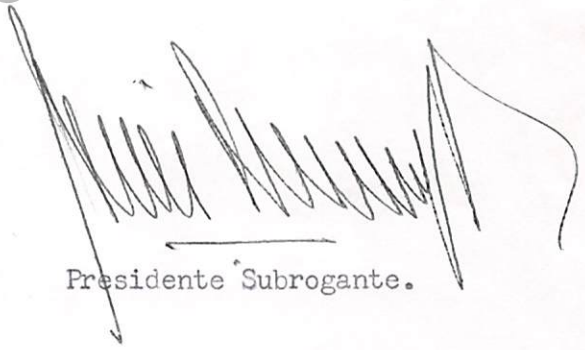
ciones democráticas nos encasillamos en nuestras diferencias y las hacemos prevalecer por sobre la voluntad democrática común, el porvenir de Chile puede ser todavía más sombrío.

Efectuamos estas reflexiones en una perspectiva histórica de largo plazo. La Democracia Cristiana y los partidos de la Izquierda Unida estamos llamados a convivir por un largo período en Chile. Juntos podemos realizar el principio de la unidad social y política del pueblo y llegar antes a la democracia, en función de una concertación que reponga la movilización social y la voluntad de lucha de los chilenos. Del mismo modo, mañana podemos tendernos para profundizar la democracia y realizar las transformaciones que nos permitan vivir en una sociedad más justa y más fraterna.

Al concluir esta comunicación quisiéramos desearle la buena ventura personal, saludar por su intermedio a los militantes del Partido Demócrata Cristiano y expresar la esperanza de que el próximo encuentro que realizarán les ayude a buscar un camino generoso de lucha y entendimiento para ^{que} el pueblo chileno recupere, cuanto antes, la dignidad y la libertad.

Comité Político de la Izquierda Unida.

Luis Fernando Luengo E., Anibal Palma F., Germán Correa, Julio Ruiz, Luis Maira, Rafael A. Gumucio, José Sanfuentes, Fany Follarollo, Juan Gutiérrez, Fernando Pérez, Víctor Barrueto, Jaime Cataldo, Agueda Saez, Alvaro Ahumada.



Presidente Subrogante.